

**Número 003, mayo 2026**

## Más allá de la estabilización: hacia una ampliación operacional de la transición económica de Venezuela

Microfundamentos de la acción humana, instituciones y agenda de reconstrucción

**Francisco J. Contreras Márquez**

Universidad de Carabobo | Broward International University

### Introducción

El debate sobre la transición económica de Venezuela se ha concentrado, con razón, en un conjunto de prioridades indispensables: controlar la inflación, ordenar el frente fiscal, recomponer el sector externo, recuperar la industria petrolera, restablecer los derechos de propiedad y normalizar las instituciones de mercado. Ese enfoque ha permitido identificar condiciones necesarias para salir del colapso macroeconómico. Sin embargo, en el caso venezolano resulta necesario precisar mejor cómo esas condiciones se transmiten hacia decisiones productivas, formalización, inversión, empleo y reconstrucción del tejido empresarial.

El problema de política pública no es únicamente cómo estabilizar la economía, sino cómo lograr que la estabilización se convierta en confianza, coordinación productiva y recuperación sostenida de capacidades. Sin una comprensión adecuada de los mecanismos de transmisión entre reglas macroeconómicas, instituciones, bienes públicos y comportamiento de hogares y empresas, la transición corre el riesgo de corregir variables nominales sin recomponer de forma duradera la capacidad productiva ni la confianza social.

Este ensayo no pretende impugnar el consenso que reconoce la insuficiencia de la estabilización aislada. Su aporte consiste en presentar una ampliación operacional y contextualizada de ese consenso para Venezuela. La tesis central sostiene que la transición debe analizarse como un problema de coordinación económica bajo incertidumbre prolongada, en el que interactúan macroestabilidad, instituciones, organización productiva, incentivos sectoriales, expectativas y microfundamentos de la acción humana.

El propósito tampoco es añadir otro programa clásico de estabilización. La contribución busca ofrecer un marco para evitar errores recurrentes: suponer que los equilibrios nominales bastan por sí solos, o creer que la iniciativa privada puede recomponerse sin reglas previsibles, bienes públicos, crédito, seguridad jurídica y confianza.

### Marco analítico de la transición

La transición económica de Venezuela debe entenderse como un proceso simultáneamente macroeconómico, institucional, organizacional y conductual. La inflación, el tipo de cambio, el petróleo, la política fiscal y la restricción externa conservan un lugar central. El punto decisivo es que esas variables necesitan canales de transmisión que permitan convertir la estabilización en decisiones concretas de producción, inversión, contratación y formalización.

Una economía no se recompone en el vacío. Se articula mediante agentes concretos que deciden con información incompleta, memoria de episodios traumáticos, horizontes temporales breves, estrategias de resguardo y acceso desigual al crédito, a la protección jurídica y a las infraestructuras básicas. Desde una perspectiva institucional, las reglas formales e informales condicionan los incentivos, reducen o elevan costos de transacción y moldean la conducta económica (North, 1990). La transición no solo modifica agregados; también redefine umbrales de confianza, costos de formalización, criterios de inversión, decisiones de contratación, estrategias de retención de talento y mapas territoriales de oportunidad. La lectura institucional y conductual de la transición complementa, pero no sustituye, la importancia de los agregados macroeconómicos.

La reconstrucción sostenible exige conectar el nivel agregado con el espacio donde operan sectores, redes territoriales, cadenas productivas y organizaciones, así como con la escala microeconómica de hogares y firmas que finalmente deciden invertir, contratar, formalizarse o esperar.

### **Diagnóstico del enfoque dominante**

La literatura reciente sobre Venezuela ha destacado que una recuperación sostenible requiere restablecer un núcleo elemental de racionalidad macroeconómica e institucional (Abuelafia y Saboin, 2020). Ese enfoque conserva plena relevancia porque reconoce la magnitud del colapso previo, la erosión de la capacidad estatal y la necesidad de secuenciar intervenciones entre emergencia y reforma. También recuerda que no existe transición estable con desorden monetario permanente, arbitrariedad regulatoria generalizada y destrucción de incentivos a la inversión. Sin administración pública mínima, infraestructura operativa, datos confiables y provisión de bienes públicos, las reformas pierden eficacia o se traducen en recomposición excluyente (Imam y Temple, 2025).

El desafío venezolano no consiste en sustituir ese consenso, sino en hacerlo operativo bajo condiciones de fragilidad institucional, informalidad extendida y desconfianza acumulada. Entre el diseño macroeconómico y la respuesta efectiva de la sociedad existe un espacio denso donde operan empresas supervivientes, arreglos informales, aprendizajes defensivos, redes familiares, mercados fragmentados, heterogeneidad territorial y expectativas distintas según territorio, tamaño de firma y posición social.

La experiencia empresarial venezolana ilustra ese punto. Muchas firmas han enfrentado inestabilidad macroeconómica y política, fallas de servicios básicos, falta de crédito y migración de talento. Al mismo tiempo, han desarrollado adaptaciones específicas: internacionalización parcial, ajustes organizacionales, mecanismos de resguardo frente al deterioro del entorno y formas de innovación bajo restricción extrema (Saboin, 2021). Esa evidencia sugiere que la transición debe proyectarse como recomposición del tejido empresarial y de la matriz de incentivos que sostienen la decisión de producir, formalizarse, invertir y contratar.

### **Mecanismos de transmisión y coordinación**

La economía política de una transición exige microfundamentos. La teoría económica ha mostrado que

los agentes no operan con racionalidad ilimitada ni con información completa. Herbert Simon introdujo la racionalidad acotada para describir decisiones tomadas bajo restricciones cognitivas y de información (Simon, 1955). Daniel Kahneman mostró que el juicio bajo incertidumbre se organiza mediante atajos mentales, sesgos y marcos narrativos (Kahneman, 2011). Akerlof y Shiller restituyeron el papel de la confianza, la equidad percibida, la ilusión monetaria y otras dimensiones no reducibles a un cálculo perfecto (Akerlof y Shiller, 2009).

En Venezuela, la persistencia inflacionaria no solo genera precios inestables; también acorta los plazos de planificación. La volatilidad regulatoria cambia las prioridades de las firmas y las lleva a privilegiar liquidez, flexibilidad y resguardo antes que inversión, expansión o formalización. La precariedad de los servicios y bienes públicos impone costos privados de autoprovisión y profundiza la segmentación territorial del mercado.

Las expectativas ocupan un lugar decisivo. Una transición económica no puede evaluarse solo por la corrección técnica de sus objetivos. También debe evaluarse por su capacidad de producir señales creíbles, inteligibles y sostenibles para agentes heterogéneos que aprenden en entornos deteriorados. La literatura reciente sobre expectativas muestra que los agentes pueden reaccionar con especial intensidad ante noticias salientes o cambios percibidos como relevantes (Bordalo et al., 2020). En una sociedad marcada por inflación, controles, arbitrariedad y pérdida de activos, la confianza no se recompone por decreto; se reconstruye mediante consistencia temporal, cumplimiento verificable y reducción progresiva de la discrecionalidad.

La informalidad añade otra razón para ampliar el marco. Las decisiones sobre formalización, evasión defensiva, pluriempleo, dolarización transaccional, migración o espera estratégica no son anomalías marginales; constituyen mecanismos centrales de adaptación. Por ello, una transición que no reduzca costos de formalidad, que no simplifique reglas y que no recupere servicios básicos puede estabilizar agregados sin recomponer de manera suficiente la base material de la producción y el trabajo.

El punto puede resumirse en una formulación simple, presentada solo como recurso sintético para ordenar el razonamiento y no como sustituto del análisis institucional y empírico:

$$T(t) = F[M(t), I(t), Z(t), x_i(t), E(t)]$$

En esta expresión,  $T(t)$  representa la trayectoria de la transición;  $M(t)$ , la estabilización macroeconómica;  $I(t)$ , la calidad y previsibilidad institucional;  $Z(t)$ , las mediaciones mesoeconómicas;  $x_i(t)$ , las decisiones microeconómicas de hogares y firmas; y  $E(t)$ , la estructura de expectativas. La fórmula no pretende constituir un modelo estructural estimable; su función consiste en subrayar que la transición surge de la interacción entre escalas.

Cuatro instrumentos ayudan a precisar esa interacción. Primero, la interdependencia sistémica: estabilización cambiaria, reforma fiscal, crédito, infraestructura y protección social se afectan mutuamente. Segundo, los límites de la predicción: en contextos de incertidumbre profunda, las heurísticas pueden operar como respuestas adaptativas de agentes heterogéneos (Dosi et al., 2020). Tercero, las decisiones discretas: hogares y firmas actúan mediante umbrales de credibilidad. Cuarto, la alternancia de escalas: lo macro, lo institucional, lo sectorial y lo micro deben leerse de forma articulada.

### De la estabilización a la reconstrucción productiva

La estabilización es el punto de partida, pero no el punto de llegada. Su función consiste en crear señales de orden, previsibilidad y disciplina que permitan a los agentes volver a calcular, invertir, contratar y formalizarse. Por ello, una agenda seria de transición no debe separar la corrección macroeconómica de los canales mediante los cuales esa corrección llega a hogares, empresas, trabajadores, territorios y cadenas productivas.

Esta sección cumple una función de puente: traduce el marco analítico en criterios de diseño público. La estabilización debe convertirse en confianza, la confianza en decisiones productivas, y esas decisiones en recomposición del tejido empresarial. Desde esa perspectiva, las opciones de política no sustituyen la disciplina macroeconómica; la vuelven operativa al conectarla con bienes públicos, reglas previsibles, crédito, formalización viable y coordinación territorial.

### Recomendaciones de política pública para la transición venezolana

A partir del análisis desarrollado, pueden identificarse cinco orientaciones de acción. Su propósito es convertir la estabilización en una agenda práctica de reconstrucción productiva y social:

**Estabilización comprensible y verificable.** La política macroeconómica debe combinar coherencia técnica con comunicación clara, metas verificables y reducción progresiva de la discrecionalidad. La credibilidad se construye más por el cumplimiento consistente que por

anuncios ambiciosos.

### Restauración prioritaria de bienes públicos económicos.

Electricidad, agua, conectividad digital, justicia mercantil, sistemas de pago e información estadística deben tratarse como infraestructura económica básica. Su provisión reduce costos de transacción y reactiva el cálculo productivo.

**Formalización económicamente viable.** La formalización debe diseñarse como una opción productiva y no como una imposición normativa. Crédito productivo, reglas tributarias proporcionales, simplificación administrativa y seguridad contractual son condiciones necesarias para reducir la informalidad defensiva.

**Política mesoeconómica focalizada.** La transición debe identificar sectores y territorios donde pequeñas mejoras institucionales o logísticas generen efectos multiplicadores, como corredores productivos, agroindustria, manufactura liviana, servicios empresariales y plataformas logísticas.

**Política del horizonte y de la confianza.** La reconstrucción económica exige reabrir horizontes de decisión. Señales persistentes de estabilidad, protección jurídica y movilidad productiva son esenciales para revertir la compresión temporal que alimenta migración, subinversión y comportamiento defensivo.

Estas orientaciones no sustituyen el diseño técnico de instrumentos específicos. Delimitan el espacio de políticas viables bajo condiciones realistas de transición y ofrecen a los decisores públicos un criterio para ordenar prioridades sin prometer resultados automáticos.

### Lineamientos para Venezuela

En Venezuela, estas recomendaciones deben adaptarse a una economía con fragilidad institucional acumulada, restricciones de financiamiento, deterioro de servicios públicos, baja intermediación crediticia, elevada informalidad y fuerte desconfianza social. La reconstrucción requiere instituciones compatibles con las restricciones concretas del país, más que la importación mecánica de diseños ideales (Rodrik, 2008). La estabilización debe preservar su jerarquía, pero necesita conectarse con reglas, capacidades y señales que permitan que hogares y empresas la perciban como un cambio sostenible y no como un episodio transitorio.

La coyuntura venezolana muestra una dinámica de ajustes parciales de incentivos e instituciones que no siempre forman parte de una estrategia macroeconómica integral.

Las flexibilizaciones en esquemas contractuales asociados al sector de hidrocarburos pueden facilitar mayor participación privada, acelerar decisiones de producción y generar flujo de caja externo. Sin embargo, sus efectos quedan limitados si persisten discrecionalidad monetaria, cambiaria y fiscal, incertidumbre regulatoria y ausencia de un ancla macroeconómica creíble. Algo similar ocurre con las discusiones sobre reestructuración de deuda: pueden abrir espacios de negociación, pero requieren un marco de estabilización suficientemente robusto para sostener expectativas de largo plazo.

Estos ejemplos sugieren que la reconfiguración económica venezolana no sigue necesariamente una secuencia clásica de estabilización y reforma. Avanza, más bien, mediante adaptaciones parciales cuyos límites se hacen visibles cuando falta coordinación macroeconómica, credibilidad institucional y previsibilidad regulatoria.

Estos lineamientos no constituyen un programa cerrado de reforma, sino una matriz de prioridades para ordenar decisiones públicas. En términos prácticos, el país requiere combinar cinco frentes: estabilización con comunicación clara y metas verificables; fortalecimiento institucional en seguridad jurídica, información pública y justicia mercantil; política mesoeconómica orientada a cadenas productivas y territorios con potencial multiplicador; formalización gradual apoyada en crédito productivo e incentivos compatibles con la productividad real de las firmas; y una política de confianza que reabra el horizonte temporal de familias, inversionistas y trabajadores.

**Cuadro 1. Escalas de la transición económica venezolana**

Escala	Problema dominante	Riesgo si se omite	Implicación de política pública
Macro	Inflación, desequilibrio fiscal, fragilidad cambiaria, restricción externa y escasez de financiamiento.	Estabilización incompleta, retorno de expectativas inflacionarias y bajo poder de coordinación de precios.	Disciplina fiscal, coherencia monetaria, reglas verificables y comunicación económica comprensible.
Institucional	Discrecionalidad regulatoria, inseguridad jurídica, baja capacidad estatal y debilidad de la información pública.	Baja inversión, informalidad defensiva, arbitraje de poder y pérdida de confianza en las reformas.	Previsibilidad normativa, justicia mercantil funcional, datos confiables, límites a la discrecionalidad y rendición de cuentas.
Meso	Cadenas productivas rotas, baja densidad empresarial, fallas logísticas y heterogeneidad territorial.	Recuperación concentrada en enclaves, escasa difusión sectorial del crecimiento y persistencia de brechas regionales.	Políticas sectoriales y territoriales, corredores productivos, servicios empresariales, infraestructura y articulación de proveedores.
Micro	Horizontes cortos, desconfianza, costos de formalidad, migración de talento y estrategias de supervivencia.	Baja formalización, inversión defensiva, fuga de capacidades y débil transmisión social de la estabilización.	Crédito productivo, reducción de costos de formalización, incentivos a la inversión, bienes públicos y señales creíbles de largo plazo.

Fuente: elaboración propia.

El cuadro organiza la traducción operativa del argumento. Su utilidad reside en separar funciones: la macroeconomía establece condiciones de estabilidad; las instituciones generan previsibilidad; el nivel mesoeconómico articula sectores, territorios y cadenas productivas; y la escala microeconómica transforma las señales en decisiones concretas.

La política pública debe alternar esas escalas, identificar cuellos de botella y priorizar intervenciones donde la credibilidad institucional, la infraestructura básica y los incentivos productivos se refuercen mutuamente.

### Restricciones de economía política

La transición venezolana también estará condicionada por restricciones de economía política. La reconstrucción institucional, la redefinición de incentivos y la coordinación entre actores públicos y privados no ocurren en un vacío técnico: dependen de equilibrios de poder, capacidades estatales, coaliciones reformistas, resistencias distributivas y credibilidad de los compromisos. Reconocer esa restricción no desplaza el análisis económico; lo vuelve más realista y evita presentar la transición como un ejercicio puramente tecnocrático.

### Objeciones y respuesta analítica

Una primera objeción sostiene que esta ampliación diluye la disciplina macroeconómica. La objeción confunde ampliación con sustitución. El argumento no niega la centralidad de la macroeconomía; niega su autosuficiencia. En procesos de reconstrucción profunda, el diseño agregado necesita una teoría de transmisión social, institucional y organizacional.

Una segunda objeción advierte que la apelación a microfundamentos puede derivar en psicologización del análisis económico. Esa deriva sería problemática si se intentara reemplazar incentivos, precios y restricciones por estados mentales aislados. No es el caso. La propuesta articula instituciones, expectativas y conducta dentro de un marco económico de coordinación, costos de transacción, incertidumbre y organización productiva.

Una tercera objeción cuestiona el uso de instrumentos heurísticos. Estas herramientas no funcionan como evidencia empírica ni como prueba definitiva. Funcionan como recursos de orden conceptual. Su valor depende de su sobriedad y de su capacidad de iluminar un problema económico real sin sustituir el análisis institucional, histórico y empírico que exige el caso venezolano.

### Priorización temporal de la transición

La agenda propuesta exige una secuencia prudente. En una fase inicial, de 0 a 12 meses, la prioridad debe concentrarse en coordinación básica, señales creíbles, provisión mínima de bienes públicos económicos y reducción visible de la discrecionalidad. En una fase intermedia, de 12 a 36 meses, el énfasis debería desplazarse hacia consolidación institucional, recuperación del crédito, formalización gradual y articulación territorial de cadenas productivas.

En una fase avanzada, cuando existan mayor confianza y capacidad estatal, podrán abordarse reformas estructurales más profundas. Esta secuencia no constituye un plan de gobierno, sino una guía para evitar que la transición prometa más de lo que puede sostener en cada etapa.

## Conclusión

El debate sobre la transición económica de Venezuela necesita integrar mejor sus distintos niveles de análisis: estabilidad macroeconómica, calidad institucional, organización productiva, restricciones de economía política y decisiones concretas de hogares y empresas. La estabilización seguirá ocupando un lugar central, y debe hacerlo. Pero una teoría de la transición no puede agotarse en inflación, tipo de cambio, petróleo, financiamiento e instituciones consideradas en abstracto. Debe incorporar cómo los agentes procesan la incertidumbre, cómo las organizaciones recomponen capacidades, cómo la informalidad reordena incentivos y cómo la heterogeneidad territorial condiciona los resultados agregados.

La transición venezolana no constituye un problema de simple corrección técnica. Constituye un problema de coordinación social bajo condiciones de fragilidad acumulada. Exige macroeconomía, pero también microfundamentos; exige restauración institucional, pero también reconstrucción organizacional; exige reglas, pero también credibilidad; exige crecimiento, pero también reapertura del horizonte de acción humana. Solo una lectura que integre esas dimensiones podrá ofrecer una hoja de ruta analíticamente robusta, políticamente verosímil y económicamente operativa.

Esta ampliación busca contribuir a una agenda de investigación y de política pública más exigente: una agenda que no renuncie al orden macroeconómico, pero que tampoco confunda la economía con sus agregados. La reconstrucción venezolana dependerá de la capacidad de articular estabilidad, instituciones, incentivos productivos, restricciones políticas y acción humana dentro de un marco creíble de largo plazo.

## Referencias

Abuelafia, E. y J. L. Saboin (2020), A look to the future for Venezuela, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo.

Akerlof, G. A. y R. J. Shiller (2009), Animal spirits: How human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism, Princeton, Princeton University Press.

Bordalo, P., N. Gennaioli, Y. Ma y A. Shleifer (2020), "Overreaction in macroeconomic expectations", American Economic Review, vol. 110, N° 9.

Dosi, G., M. Napoletano, A. Roventini, J. E. Stiglitz y T. Treibich (2020), "Rational heuristics? Expectations and behaviors in evolving economies with heterogeneous interacting agents", NBER Working Paper, N° 26922, Cambridge, National Bureau of Economic Research.

Imam, P. A. y J. R. W. Temple (2025), "State capacity and growth regimes", IMF Working Papers, N° 2025/014, Washington, D.C., Fondo Monetario Internacional.

Kahneman, D. (2011), Thinking, fast and slow, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux.

North, D. C. (1990), Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge, Cambridge University Press.

Rodrik, D. (2008), "Second-best institutions", American Economic Review, vol. 98, N° 2, pp. 100-104.

Saboin, J. L. (2021), The Venezuelan enterprise: Current situation, challenges, and opportunities, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo.

Simon, H. A. (1955), "A behavioral model of rational choice", Quarterly Journal of Economics, vol. 69, N° 1, pp. 99-118.



### Breve biografía del autor

Francisco J. Contreras Márquez es economista, profesor universitario e investigador en análisis económico, finanzas y políticas públicas.

Profesor adjunto en programas de posgrado y doctorado, desarrolla trabajos sobre macroeconomía venezolana, riesgo país, transición económica, instituciones, finanzas corporativas y modelación aplicada. ORCID: 0000-0002-9448-2543.